

EXPRESO AGRAVIOS

SR JUEZ CIVIL Y COMERCIAL COMUN DE LA SEGUNDA NOMINACION.-

JUICIO: VARGAS MERCEDES MALVINA VS. CERVIÑO PABLO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS.- EPXTE N° 2799/07.-

Javier Alejandro Bustos, de las condiciones que constan en autos, me dirijo a S.S. y respetuosamente digo:

Siguiendo expresa instrucciones de mi mandante, y en legal tiempo y forma, vengo a formular expresión de agravios en contra de la sentencia recaída en autos, a los efectos de que la Excma. Cámara del fuero declare su Nulidad, en base a los siguientes argumentos jurídicos y facticos que paso a exponer:

I.- PRIMER AGRAVIO: LA SENTENCIA RECURRIDA AGRAVIA A ESTA PARTE AL IGNORAR LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS, HABIENDO SIDO ARTICULADA COMO UNA MERA NULIDAD PROCESAL.-

En primer lugar corresponde poner de manifiesto que el fallo apelado es nulo, por cuanto omite resolver el planteo realizado por esta parte excede la mera articulación de una nulidad procesal, toda vez que engloba una cuestión mucho más compleja y abarcativa que se relaciona con garantías constitucionales que hacen al derecho de defensa en juicio.

Como auxiliares de justicia, los abogados están obligados a velar por la asepsia del proceso en cuanto a posibles violaciones de derechos esenciales de los litigantes.

Ello implica que las notificaciones a las partes sean correctas, lo que en definitiva se persigue es que la sentencia a dictarse, sea la conclusión de un proceso enmarcado en el respeto irrestricto a la garantía constitucional de la defensa en juicio de los litigantes.-

En el siguiente fallo laboral, puede leerse la exposición de motivos que el legislador tuvo en cuenta, en la redacción del Código Procesal Laboral de Tucumán, Ley 6204, punto 3, análogo al artículo 153 del Código Procesal Civil de Tucumán, y porque razón el legislador expresamente prevé la notificación en el domicilio real de la sentencia definitiva:

“PROCESAL LABORAL: NOTIFICACION DE SENTENCIA DEFINITIVA EN DOMICILIO REAL FUERA DE LA PROVINCIA. LEY 22172. SU VALIDEZ. PROTECCION DEL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA. Es del caso puntualizar que, en la Exposición de Motivos de la Ley Nº 6.204 (Código Procesal), bajo el punto “3.- NOTIFICACIONES”, se expresó: “...Se han ampliado las notificaciones personales y las que deben efectuarse en el domicilio real, a fin de dar mayor seguridad a los litigantes....”. Como claramente se advierte, esta finalidad de brindar mayor seguridad a los litigantes, fue perseguida con mayor énfasis por el legislador en el proceso laboral que en otros procesos, al disponer que la sentencia definitiva sea notificada personalmente en el domicilio real de los litigantes.

Por lo tanto, no puede prescindirse del hecho que las notificaciones involucran la protección de las garantías procesales, como la del debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio, consagrados por el Art. 18 de la Constitución Nacional. Ir a contrario, sería vulnerar no sólo el interés individual de las partes sino la recta administración de justicia con el consecuente desmedro del valor seguridad jurídica.

El derecho de defensa se garantiza y sostiene en el correcto sistema de notificaciones de los decisorios judiciales. De allí que la normativa procesal le da medular importancia en la formulación de las formas y plazos que deben cumplirse.

La misma ley 22.172 es una garantía para todos los habitantes de esta Nación, que ese proceso de comunicaciones de actuaciones judiciales, se ha de cumplir sin importar el domicilio o la residencia de quien es parte de un proceso en otra jurisdicción, y por supuesto respetando las distintas previsiones legales y reglamentaciones locales que cada jurisdicción provincial ha establecido. Tampoco se observa razón fundada para que pueda entenderse como dilatorio la petición realizada por el Dr. C. C. de realizar la notificación tal cual está dispuesta en la providencia en crisis. Cumplir con lo que la ley de forma prevé no puede ser tildado como acto dilatorio.

Se trata de formalidades cuyo cumplimiento es innegable. Por todo lo expresado, no resultan atendibles los fundamentos expuestos por el accionado

en su escrito recursivo y por lo que corresponde rechazar la revocatoria en tratamiento, resultando el proveído atacado ajustado a derecho” ¹

Como claramente se advierte, la finalidad de brindar mayor seguridad a los litigantes, fue perseguida en los digestos procesales, al disponer que la sentencia definitiva sea notificada personalmente en el domicilio real de los litigantes.

Por lo tanto, no puede prescindirse del hecho que las notificaciones involucran la protección de las garantías procesales, como la del debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio, consagrados por el Art. 18 de la Constitución Nacional.

Por lo que mal puede el a-quo referir en el fallo recurrido a que “...no hay disposición alguna que mande a practicar las notificaciones impugnadas en el domicilio real del accionado...”

Como puede verse, existe norma específica que manda a notificar en el domicilio real del accionado la sentencia definitiva (art. 153 CPCT que analizaremos mas adelante) y que la intención del legislador de ESPECIFICAR QUE LA NOTIFICACION DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LAS INTERLOCUTORIAS CON FUERZA DE TAL (art. 153 inc. 5 CPCT) es la sencilla razón que el Juez no tuvo en cuenta y es por la simple razón de que PRESCINDIR DE LA NOTIFICACION COMO INDICA EL CODIGO PROCESAL AFECTA DE FORMA DIRECTA A LA ACTORA EN LA PROTECCION DE LAS GARANTIAS PROCESALES DE DEBIDO PROCESO LEGAL Y DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO, consagrados por art. 18 de la C.N. .-

Reiteradamente, el máximo tribunal advirtió que el Juez debe ser, sin duda, el primer interesado en extremar las precauciones para lograr un debido proceso legal; “propósito que armoniza con el carácter inobjetable de la sentencia favorable a que aspira, a la vez que el órgano jurisdiccional debe asumir todos los recaudos para garantizar debidamente la intervención de los sujetos llamados a la contienda y el ejercicio de los derechos en el marco del proceso”.

Igualmente, ha sido señalado que corresponde proceder con estrictez en la apreciación de los recaudos legales requeridos para la notificación de la

¹ **Camara de Trabajo, Sala 1 in re:** “CORREA JUAN MIGUEL Vs. AUTOS IMPORTADOS S.R.L., SEOANE FABIO ENRIQUE, SEOANE GUSTAVO Y MITSUBISHI MOTORS-ALFACAR SA S/ COBRO DE PESOS” Nro. Expte: 120/14 Nro. Sent: 197 Fecha Sentencia 04/11/2021

Sentencia; y ante la duda se impone adoptar el criterio que evite cualquier conculcación de derechos y garantías de raigambre constitucional (cfr. CSJTuc., sentencia N° 450 del 18/5/2009 y fallos allí citados: N° 431 del 30/5/2005; N° 35 del 12/02/2003; N° 604 del 15/8/2003; N° 1159 del 30/11/2006; N° 1159 del 30/11/2006, entre muchos otros).

En su actual integración, la Suprema Corte provincial ha ratificado esta doctrina y reiterado el rigor interpretativo en torno a la notificación de la demanda (cfr. entre otras, sentencia N° 992 del 19/10/2009). No cabe perder de vista que si bien se trata de un proceso regido por el principio dispositivo, la extinción o pérdida de derechos tiene como premisa que el sujeto estuvo efectivamente en condiciones de ejercerlos. Máxime cuando se trata de actos de notificación, que habilitan a la parte a fijar posición en resguardo de sus intereses, lo cual supone que la diligencia debió cumplirse de manera regular, de acuerdo a las formalidades previstas por la ley adjetiva para garantizar el acto. Sólo en ese caso podrá reprocharse al sujeto la omisión en comparecer al proceso, y por ello es también reiterado el criterio de que el avance de las actuaciones sin que la parte accionada haya sido notificada en debida forma de la Sentencia constituye una de las hipótesis de alteración grave de la marcha del proceso, que deviene en la nulidad insanable de los actos pertinentes (cfr. CSJTuc., sentencia N° 765 del 12/9/2005).

De allí que en caso de duda, habrá que atenerse a la solución que evita conculcar derechos de raigambre constitucional (cfr. CSJTuc., sentencia N° 604 del 15/8/2003).

En consecuencia el fallo en cuestión debe ser declarado nulo, por afectación a una de las partes de elementales de garantías constitucionales, y proceder a notificar la sentencia que da por terminado el proceso por perención de instancia en el domicilio real de la actora como indica el código de procedimiento, siendo clara la intención del legislador en tal sentido, al redactar la norma en cuestión.-

SEGUNDO AGRAVIO: LA SENTENCIA RECURRIDA ES ARBITRARIA POR CUANTO SE APARTA DE LAS NORMAS APLICABLES AL CASO, SIN MOTIVO ALGUNO, Y SIN DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS MISMAS.-

En efecto, el Juez de grado, se aparta de la norma aplicable al caso sin motivo ni fundamento alguno, cuando la única posibilidad que tiene de no aplicar una norma de derecho positivo, en este caso artículo 153 inc. 5 del CPCT, es declarando la inconstitucionalidad del mismo, lo que en la sentencia recurrida no aconteció.-

En efecto, veamos detenidamente el **CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE TUCUMAN: TITULO III - ACTOS PROCESALES – CAPITULO III- NOTIFICACIONES:**

El artículo 153 dispone que tipo de providencias y/o sentencias y/o actos procesales deben notificarse de forma personal o por cedula “en el domicilio”, expresamente dice:

ART.153.-NOTIFICACIÓN PERSONAL O POR CÉDULA. Serán objeto de notificación personal, directamente en el expediente o en el domicilio:

....

5.) Las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales que se dictaran en el curso del proceso.

¿A QUE SE REFIERE EL ARTICULO CON NOTIFICACION PERSONAL EN EL EXPEDIENTE O EN EL DOMICILIO?

EL ARTICULO **ART.155 DEFINE EXPRESAMENTE A LO QUE SE REFIERE CON NOTIFICACION EN EL EXPEDIENTE Y TAMBIEN INDICA LA FORMA DE REALIZARLO**

“EN EL EXPEDIENTE. La notificación personal en el expediente se hará firmando el interesado y contendrá la fecha en que la misma tuviera lugar, debiendo la diligencia ser atestada por el secretario o prosecretario. Si la parte no supiera o no pudiera firmar, lo hará a su ruego otra persona ante el mismo funcionario, quien lo hará constar.”

¿ Y EN EL DOMICILIO?

CURIOSAMENTE EL ARTICULO 156 DEL CODIGO TAMBIEN NOS INDICA LA FORMA DE REALIZAR LA NOTIFICACION EN EL DOMICILIO MEDIANTE CEDULA COMO LO INDICA EL ART. 153, Y EXPRESA

“EN EL DOMICILIO. CÉDULA. CONTENIDO. Si la notificación se hiciera en el domicilio de la parte, el notificador llevará por duplicado cédula en la que conste la carátula del asunto, el juzgado y secretaría donde se tramita, el nombre y apellido de la persona a quien va a notificar y la transcripción de la providencia o de la parte dispositiva de la sentencia objeto de la notificación. En caso de acompañarse copias de escritos o documentos, la cédula deberá contener detalle preciso de aquellas.

En primera instancia, la cédula será suscripta por el secretario, el prosecretario o por el letrado apoderado o procurador de la parte que tenga interés en la notificación. Deberán ser firmadas sólo por el secretario o prosecretario las cédulas de los tribunales de alzada y de la Corte Suprema y las que notifiquen resoluciones que dispongan medidas cautelares o entrega de bienes. La presentación de cédula en la secretaría para su diligenciamiento importará la notificación de la parte representada. En ningún caso podrá retirarse el expediente para la confección de cédulas.”

Como puede verse EL LEGISLADOR NO DEJO LIBRADO A LA INTERPRETACION DEL JUEZ LA FORMA DE NOTIFICACION, SINO QUE FUE BASTANTE ESPECIFICO, INCLUSIVE DETALLADAMENTE NOS INDICA LA FORMA DE REALIZAR LA DILIGENCIA

¿Qué PASA EN CASO DE NEGATIVA O DE AUSENCIA?

También previó esta posibilidad el legislador al redactar juiciosamente el artículo 157, que dice

“ENTREGA. AUSENCIA O NEGATIVA. En el acto de la notificación, hará entrega de una de las copias al notificado, la que será firmada por el notificador dejando constancia del día y hora de la entrega, y al pie de la otra, que se agregará al expediente, pondrá constancia de la diligencia con expresión del día, hora y lugar en que se hubiera practicado y la firmará conjuntamente con el notificado.

Cuando no encontrase a la persona a quien va a notificar, entregará la cédula a cualquiera otra que manifieste ser de la casa.

Si ésta se negase a recibirla o a firmar, o no hubiese nadie para entregarla, la fijará en la puerta del domicilio que hubiese constituido o que se hubiese denunciado, dejando la constancia pertinente en la cédula bajo su firma.”

Luego el legislador menciona expresamente que NO PUEDE NOTIFICARSE POR TELEGRAMA o CARTA DOCUMENTO, LA SENTENCIA DEFINITIVA (ART. 158 procesal) SINO POR CEDULA EN EL DOMICILIO REAL como se dispone EXPRESAMENTE.-

¿Qué pasa si no se notifica conforme indica el art, 153 procesal?

Toda notificación que se hiciera en contravención a lo dispuesto por los artículos anteriores será nula y el secretario, prosecretario, letrado apoderado o procurador y/o empleado que la causara responderán por los perjuicios que pudieran ocasionarse a las partes, y serán pasibles de una multa, aplicada por el juez o tribunal, y cuyo monto será establecido por la Corte Suprema. El importe de la multa será ejecutado en la forma prevista en el artículo 43. (art. 164 primera parte, Cpcct)

Como puede verse, NO TAN SOLO QUE DISPONE LA NULIDAD DE LAS NOTIFICACIONES PRACTICADAS EN CONTRAVENCION CON LO DISPUESTO POR EL ART 153, SINO QUE AL RESPONSABLE QUE HUBIESE OCASIONADO DICHA NOTIFICACION DEBE IMPONERSE UNA MULTA, POR OCASIONAR UN PERJUICIO EN CONTRA DE ALGUNA DE LAS PARTES DEL LITIGIO, EN ESTE CASO LA PARTE ACTORA.-

EN CONSECUENCIA, ES NOTORIO EL APARTAMIENTO DE LAS NORMAS PROCESALES DISPUESTAS PARA EL CASO QUE EL JUEZ DE FORMA ARBITRARIA NO APLICA, NI DA FUNDAMENTOS DE LA FALTA DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS, COMO TAMPOCO DECLARA SU INCONSTITUCIONALIDAD COMO PARA JUSTIFICAR TAL FALTA DE APLICACIÓN DEL DERECHO POSITIVO VIGENTE.-

EN VIRTUD DE ELLO, CONFORME LO DISPONE EN EL MISMO CAPITULO DE NOTIFICACIONES REDACTADO, LA CEDULA PRACTICADA EN OTRO DOMICILIO QUE NO SEA EL DOMICILIO REAL DE LA ACTORA ES NULO Y ASI DEBE SER DECLARADO, SIENDO ADEMAS QUE DEBE IMPONERSE UNA MULTA A QUIEN OCASIONO DICHO PERJUICIO.-

TERECER AGRAVIO: EL JUEZ ACTUANTE SE APARTA DE PRUEBAS APORTADAS POR ESTA PARTE , SIN SIQUIERA CONSIDERARLAS, RESULTANDO ARBITRARIO EL FALLO EN CUESTION POR AFECTACION DE DERECHO DE DEFENSA, DE OFRECER Y PRODUCIR PRUEBAS -

En efecto, en el escrito de interposición de Nulidad, esta parte menciona la circunstancia que debió ser tenida en cuenta con un criterio de razonabilidad, y garantista por parte del Juez, ya que se hizo mención a que la perdida de contacto del letrado Brito (ex apoderado de la actora) sufrió una enfermedad neurológica tempestiva ACCIDENTE ISQUEMICO TRANSITORIO (antesala de un ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR – ACV) producto de estrés, y mediante la cual quedo incapacitado un prologando tiempo para trabajar.

Este hecho fue ofrecido como prueba informativa en el escrito de interposición de la nulidad mentada, expresamente se solicitó que se libre oficio al Colegio de Abogados de Tucumán a los fines de que informe si en el año 2015 se otorgó licencia por enfermedad al letrado Carlos Guillermo Gustavo Brito, Matricula profesional 5634, y por qué motivos, asimismo que acompañe la documentación acompañada por dicho profesional, entre las que se encuentra la historia clínica, diagnostico, medicación y pronóstico de la enfermedad o accidente neurológico .-

El Juez en su sentencia, NO TAN SOLO QUE SE APARTO ARBITRARIAMENTE DE LA PRUEBA OFRECIDA POR ESTA PARTE sino que en el considerado de la misma hace mención a la “supuesta enfermedad” del Dr. Brito.-

Es decir, NO TAN SOLO QUE NO PRODUCE LA PRUEBA OFRECIDA sino que DA POR HECHO O INTRIGA EN QUE LA ENFERMEDAD CUYA PRUEBA TRATA DE PRODUCIR ESTA PARTE NO EXISTIO.-

Realmente llamativo.

Sin perjuicio de ello, a los efectos de la Nulidad perseguida, es evidente que el fallo resulta arbitrario por apartarse de pruebas aportadas por esta parte y que no fueron producidas, ni atendidas, violando así el derecho de defensa que intrínsecamente supone el derecho a ofrecer y producir pruebas y a ser oído (art. 18 CN).-

La notificación de la sentencia definitiva o la que haga las veces de tal, implica un acto procesal esencial que pone en ejercicio el derecho de defensa en juicio de la parte, por lo que sería inconsistente que se pretende hacer valer a tales fines, un domicilio que no cumple con las exigencias legales para ser valorado como domicilio real de una persona.

Correspondía al A-quo analizar la óptica desde los recaudos formales que debe reunir el domicilio a los efectos de que la notificación de la Sentencia definitiva, sea un domicilio reputado como valido, apreciación que debió realizarse con criterio restrictivo, por estar involucrado el derecho de defensa en juicio, dejando de lado cualquier hermenéutica judicial contraria a los principios constitucionales del debido proceso y derecho de defensa en juicio.

Las actuaciones practicadas en autos, revelan manifiestas irregularidades que tiñen de nulidad el proceso, produciendo una verdadera alteración de su estructura esencial, en los términos del art. 166 CPCyC.

La trascendencia de la notificación de la Sentencia impone al órgano jurisdiccional el máximo rigor a la hora de verificar el cumplimiento de las formalidades impuestas por la ley para asegurar la finalidad propia del acto, como de interpretar las cuestiones que se susciten en torno a la validez y eficacia de ese acto procesal. Por ello, se ha dicho que “El juez o la alzada, en su caso, no deben dudar en decretar la nulidad de oficio, una vez advertida la indefensión...” (cfr. Fenochietto, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Astrea, 1999 vol.2, pg. 347).

Lo atinente al modo de practicarse las notificaciones está sometido al contralor del órgano jurisdiccional, que se encuentra habilitado para declarar aún de oficio la nulidad.

Cabe concluir que la notificación por cédula al domicilio constituido, no tuvo eficacia, y no fue diligenciada en el domicilio real de la actora y por lo tanto resulta inválida.

Esta conclusión no se ve modificada por la supuesta preclusión de la oportunidad para impugnar aquella notificación.

Se trata de una nulidad absoluta e insanable, y por tanto invalorable, con lo cual su declaración procede aún de oficio al advertirse vicios en el procedimiento previo al dictado de la sentencia recurrida, de carácter manifiesto, y que impliquen la violación de las formas sustanciales del procedimiento por omisión de un acto que la ley impone para garantizar el derecho de terceros (arg. art. 165, segundo párrafo, 166 tercer párrafo y cc., CPCC). La ley rodea al acto de formalidades tendientes a asegurar el efectivo conocimiento de la parte emplazada, para evitar el estado de indefensión que implica la imposibilidad de oponer excepciones y defensas (cfr. Fenochietto, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Astrea, 1999 vol.2, pg. 346).

En consecuencia solicito se haga lugar al recurso de apelación planteado, y se anule la sentencia recurrida por los motivos expuestos, con expresa imposición de costas a los demandados en caso de oposición.-

Proveer de Conformidad

SERA JUSTICIA.-